Fujimori Péru

Carlos Pesantez

Los veinte años del "autogolpe" de Fujimori: el surgimiento del "fujimorismo"

Gustavo Pastor

El « *autogolpe* » del 5 de abril de 1992 constituye sin duda uno de los eventos políticos más importantes de la historia contemporánea peruana. En efecto, las medidas tomadas por el Presidente Fujimori durante sus dos primeros años de gobierno (1990-2000) tendrán consecuencias permanentes en las estructuras económicas y políticas del país. Recordemos, brevemente, los principales acontecimientos que condujeron al *autogolpe de Estado*. En julio de 1990, el gobierno de Alan García se terminaba en un considerable caos económico y social ocasionado por una mala gestión de la crisis de la deuda. Así, en 1989, la economía peruana se había contractado de -11,9 % du PIB, la inflación había aumentado en 2775,3 % y la capacidad de consumo se había reducido en 36 %. La guerrilla de Sendero Luminoso, por su parte, había ganado terreno. En 1989, Sendero Luminoso había perpetrado 3,149 ataques, ocasionado 2,878 muertos y se había convertido en una amenaza real para la continuidad política del orden constitucional peruano. Es en este contexto socio-económico bastante catastrófico que las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1990 se desenvolverán. Nada permitía sin embargo anticipar el "tsunami" político que se preparaba subterráneamente. El sistema político peruano parecía designar naturalmente al candidato del Frente Democrático, "FREDEMO", Mario Vargas Llosa, como el sucesor del Presidente García. El prestigioso escritor contaba, en efecto, con el apoyo de toda la clase dirigente peruana (cuadros políticos, grupos económicos, medias, Iglesia, etc.). Frente a un sistema de partidos políticos bastante deslegitimado, un pequeño partido político, "Cambio 90", va surgir presentando la candidatura de un universitario de origen japonés, Alberto Fujimori, quien era totalmente desconocido hasta ese momento por la clase política peruana. Su imagen de hombre cercano al pueblo y su mensaje - "honestidad, tecnología y trabajo" – van a marcar profundamente el inconsciente de los electores peruanos que lo llevarán en sólo semanas a la presidencia de la República.

Desprovisto al mismo tiempo del apoyo de un partido político implantado de larga data, de una mayoría en el Parlamento y de un plan de gobierno operacional, el nuevo presidente deberá improvisar y revenir sobre algunas promesas electorales. En efecto, Fujimori se había comprometido durante la campaña a no aplicar el programa económico radical propuesto por Vargas Llosa, compromiso político que le había valido el apoyo decisivo de la izquierda y del centro izquierda. Una vez en el poder, Fujimori, bajo la influencia de gobiernos extranjeros, de organizaciones internacionales y de consejeros peruanos y extranjeros, hará

prueba de pragmatismo tomando a su cuenta las reformas económicas neoliberales del FREDEMO. Otro elemento importante de las primeras horas del « régimen Fujimori » será la formación de una alianza política entre el poder ejecutivo, la alta dirección de las fuerzas armadas y un equipo de profesionales independientes[1]. Esta coalición de poderes se proponía poner en práctica un proyecto político a largo plazo que debía asegurar el desarrollo, la modernización y la pacificación del país. Este régimen civico-militar, poco interesado en el Estado de derecho y las instituciones políticas peruanas, se le conoce como « fujimorismo »[2].

LA ECONOMIA, SENDERO LUMINOSO Y EL *AUTOGOLPE*

El suceso del Presidente Fujimori dependía principalmente de dos factores: su capacidad a relanzar la economía y a contener la progresión militar de Sendero Luminoso. En el plano económico, el nuevo presidente se apoyará en un equipo de tecnócratas peruanos y extranjeros para aplicar un programa draconiano de estabilización económica (1990-1991). Estas reformas radicales buscaban cambiar el modelo económico hacia una industrialización por substitución de exportaciones, abrir el mercado interior y liberalizar el comercio. El gobierno peruano en seguida firma acuerdos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y otros bancos privados para comenzar a pagar su deuda externa y acceder a nuevos créditos, logrando así reinsertarse en el mercado internacional de capitales. A fin de honorar sus compromisos, el gobierno debía retomar el control de sus finanzas públicas y llenar rápidamente las arcas del Estado. Las recetas fiscales estando excesivamente bajas (solamente 4,9 % del PIB en 1991), el gobierno crea, para aumentar la presión tributaria, la Súper Intendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)[3]. Entre las otras medidas radicales que se aplicaron para alimentar las arcas del Estado destacan: la privatización de las principales empresas del Estado, la reducción a la mitad de los funcionarios de la administración pública, el rigor en los gastos estatales, la desregulación del mercado de trabajo, la fuerte devaluación de la moneda, la supresión de las subvenciones, etc[4]. De otra parte, el Estado buscó atraer las inversiones y los capitales extranjeros suprimiendo todos los controles en los mercados de cambio y de capitales y al mismo tiempo aumentando la tasa de interés del país. El programa de estabilización económica encontró un rápido suceso, debido principalmente a que el gobierno logró demostrar una gran determinación política y supo rodearse de profesionales competentes para aplicar las nuevas orientaciones económicas.

[1] Este grupo de profesionales independientes (compuesto principalmente de economistas) era muy cercano a los principales grupos empresariales peruanos, a las organizaciones patronales y a las instituciones financieras internacionales.
[2] J. Cotler, R. Grompone, *El Fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*, Lima, IEP, 2000.
[3] La SUNAT es un organismo estatal independiente que tenía como misión replantear enteramente el sistema de recaudación de impuestos.
[4] B. Revesz, « *Pérou: érosion des institutions et incertitudes économiques* », en G. Couffignal (dir.), Amérique Latine 2000, Paris, La documentation française, 2000.

En la guerra contra Sendero Luminoso, el nuevo gobierno va apoyarse en el alto mando de las fuerzas armadas y en el servicio de inteligencia. Desde 1991, el poder ejecutivo intenta hacer votar numerosos proyectos de ley destinados a combatir frontalmente los « grupos terroristas ». No obstante que el Parlamento se había pronunciado mayoritariamente en favor de las reformas económicas, se muestra mucho menos cooperativo con el Ejecutivo en materia de seguridad interior. A comienzos del año 1992, el conflicto estalla cuando el Parlamento declara su intención de revisar los 20 decretos de urgencia emitidos por el ejecutivo en materia de pacificación y defensa nacional. La mayoría de parlamentarios consideraban en efecto que esos decretos conferían demasiadas prerrogativas a los militares, constituyendo por lo tanto un riesgo para el respeto de los derechos humanos, y, que en conclusión, estos buscaban redefinir el equilibrio de poderes entre las fuerzas armadas y las autoridades civiles en las zonas amenazadas por Sendero Luminoso. Según Degregori y Rivera, la incapacidad del presidente a deshacerse de la alianza política pactada con las fuerzas armadas en el marco de la lucha antiterrorista explicaría su decisión de disolver el Parlamento[5]. Unas horas antes del voto de la Asamblea sobre la revisión de estos decretos, Fujimori aparecerá en la televisión para anunciar la disolución de Parlamento, la suspensión de la constitución, la intervención de los gobiernos locales y del poder judicial, así como la composición inmediata de un « nuevo gobierno de urgencia y de reconstrucción nacional ». Según el presidente, todas estas medidas estaban destinadas a solucionar los graves problemas que enfrentaba el país, evitando la obstrucción sistemática de los otros poderes del Estado (juzgados de corruptos e ineficaces).

El *autogolpe* fue declarado la noche el 5 de abril de 1992 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la policía que salieron inmediatamente a las calles para aplicar el estado de urgencia y asignar a domicilio a un cierto número de hombres políticos, periodistas y líderes de opinión. Lo más sorprendente fue el apoyo de la población a las medidas excepcionales tomadas por el gobierno: en efecto, según todas las encuestas, aproximadamente 80 % de peruanos se declaraban favorables a la decisión del Presidente. Toda la clase política, tomada por sorpresa, se mostró totalmente incapaz de impedir la ruptura del orden democrático. El autogolpe se acompañaba además de una serie de decretos presidenciales que destituían los jueces independientes y daban a las fuerzas armadas el control total de la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. Aclamado al interior del país, el autogolpe de Fujimori lo era bastante menos en el exterior; donde la comunidad internacional y los organismos multilaterales reprobaban la ruptura del orden democrático. La multiplicación progresiva de presiones económicas venidas del exterior contra el gobierno obligará a Alberto Fujimori a restablecer el orden democrático convocando nuevas elecciones parlamentarias.

[5] C. I. Degregori, C. Rivera, *Perú 1980-1993: Fuerzas armadas, subversión y democracia*, Documento de trabajo, Documentos de Política n°5, Lima, IEP, Julio 1993.







LAS CONSECUENCIAS POLITICAS DEL *AUTOGOLPE* Y DEL « FUJIMORISMO »

Las consecuencias políticas del *autogolpe* son considerables. Las elecciones fueron organizadas en noviembre 1992 para consagrar una nueva forma de poder legislativo: el antiguo Parlamento – dos cámaras (diputados y senadores) y 240 representantes – fue remplazado por un Congreso único de 120 miembros. Este fue encargado en seguida de redactar una nueva Constitución que integrará las nuevas reglas de juego dictadas por el *fujimorismo* en materia económica y de seguridad interior. Los partidos políticos tradicionales buscando deslegitimar el *autogolpe de Fujimori* se abstuvieron (en su mayoría) de participar en las elecciones para el nuevo Congreso, sin embargo el único resultado de esta acción fue garantizar la obtención de una mayoría en el poder legislativo al partido del presidente. Entre los principales cambios políticos introducidos en la Constitución de 1993, podemos mencionar la reelección presidencial, la revisión de las formas de escrutinio, la redefinición de la representación política según las diferentes regiones del país, la interrupción del proceso de descentralización administrativa, el endurecimiento de las penas ligadas al delito de terrorismo, la redefinición del rol económico el Estado, entre otros. La Constitución fue en seguida ratificada por un referéndum presentado a la población como una suerte de validación de los buenos resultados del gobierno Fujimori en materia económica y en pacificación[6].

La obstinación del « régimen » por mantenerse en el poder varios quinquenios sucesivos se revela *in fine* bastante nefasto para el país, y eso, a varios títulos. Primero que nada, el ejecutivo se acostumbró a utilizar los recursos y los servicios del Estado para servir sus propios intereses en detrimento del interés público. Los programas sociales, enfocados hacia las poblaciones más vulnerables, fueron claramente utilizados para constituir una clientela electoral solida y fiel al Presidente Fujimori. "El chino", llamado así por sus orígenes asiáticos, recorría todo el país inaugurando obras públicas y distribuyendo alimentos, medicamentos, computadoras en las escuelas, tractores en el campo, etc. Más tarde, el régimen no duda en utilizar los servicios de inteligencia, el poder judicial y la administración tributaria para perseguir a los opositores. En seguida, la extrema personalización del poder deseada por el Presidente Fujimori y su empresa de deslegitimación de todas las otras instituciones políticas del país costaron muy caro a la joven democracia peruana que vio su sistema de partidos políticos desplomarse[7]. A partir de este momento, los candidatos

---

[6] El gobierno va lograr capturar a Abimael Guzmán y la alta dirección de Sendero Luminoso en septiembre 1992, y logrará negociar un acuerdo de paz en octubre 1993. La economía peruana va experimentar por su parte una neta mejoría con un crecimiento del PIB que culminará con 11,9 % en 1994. El "si" al referéndum se impondrá no obstante de forma ajustada (52,7 %) gracias al voto de Lima. Las provincias, por su parte, vieron con malos ojos la interrupción del proceso de descentralización.

[7] Sobre este tema, consultar los libros de M. Tanaka, *Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995*, Lima, IEP, 1998, y N. Lynch, *Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú, 1980-1992*, Lima, UNMSM, 1999.

independientes serán percibidos por los electores como los más aptos a aportar soluciones eficaces a los problemas del país. En fin, la desprofesionalización y la corrupción de todos los poderes del Estado van a consolidar una forma de « democracia degradada » que manchó durablemente la imagen del Estado peruano cuya eficacia y legitimidad son todavía sospechosas en los ojos de los ciudadanos[8]. Finalmente, el modelo autoritario de Fujimori estalló bajo la presión de sus propias contradicciones en 2001. En efecto, si el autoritarismo del sistema Fujimorista había resultado muy útil para retomar el control de la economía y pacificar el país, este sin embrago no permitía la aplicación de las reformas de "segunda generación" que estaban enfocadas a luchar contra la corrupción en el Estado y a aumentar sus capacidades administrativas. El presidente Fujimori y sus principales socios políticos acabaron en prisión, pero la voluntad de instaurar un régimen autoritario de *mano dura*, con el concurso de civiles, persiste todavía en una minoría del alto mando de las fuerzas armadas y en un sector nada despreciable de la población peruana que está siempre dispuesta a apoyar este tipo de iniciativas. Hoy, el Presidente Humala, de formación militar, parece preferir el orden democrático al orden autoritario. Sin embrago, la presencia de algunos militares en el gobierno, la reaparición de la amenaza securitaria de Sendero Luminoso y el aislamiento progresivo del presidente permiten encontrar algunas similitudes con los primeros años de la era Fujimori. Sólo queda esperar que el Presidente Humala no cambie de rumbo!

[8] Ver O. Dabène, *Amérique latine, la démocratie dégradée,* Bruxelles, Editions complexe, 1997.